Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a ocho de febrero de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión con número **06490/INFOEM/IP/RR/2023**, promovido por un particular que no señalo nombre o seudónimo con el cual desee ser identificado, quien en lo sucesivo se le denominara como la parte **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Fiscalía General de Justicia del Estado de México,** en lo subsecuente **el Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S**

**PRIMERO.** Con fecha 30 (treinta) de agosto de 2023 (dos mil veintitrés), la parte **Recurrente** presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia **PNT**, la cual se encuentra estrechamente vinculada con el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo posterior el **SAIMEX**, ante **el Sujeto Obligado**, solicitud de acceso a la información pública, registrada bajo el número **00883/FGJ/IP/2023**,mediante la cual solicitó lo siguiente:

*"Solicito información estadística de las siguientes carpetas de investigación:*

*NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09*

*NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09*

*1. Cuándo se iniciaron*

*2. Número de imputados*

*3. Numero de denunciantes y/o querellantes.*

*4. Si el o los son personas físicas o morales.*

*5. La dependencia dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que actualmente tiene a su cargo la integración de las carpetas de investigación.*

*6. El nombre del agente del ministerio público que tiene a su cargo la investigación de dichas carpetas.*

*7. Si en dichas carpetas de investigación se ha determinado el ejercicio de la acción penal.*

*8. Si en dichas carpetas de investigación se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.*

*9. Si en dichas carpetas de investigación se ha determinado el archivo temporal.*

*10. Se informe si dichas carpetas se encuentran en la etapa de investigación inicial.*

*11. Se informe si dichas carpetas se encuentran en la etapa de investigación complementaria.*

*12. Se informe el estatus actual de dichas carpetas de investigación.*

*CABE MENCIONAR QUE AL PARECER LA CARPETA VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 TUVO SU ORIGEN EN VALLE DE BRAVO Y DESPUES FUE ENVIADA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTÍA MAYOR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN TOLUCA, DONDE AL PARECER SE LE ASIGNÓ EL SIGUIENTE NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09. SE ANEXA PARA MEJOR CONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE SOLICITA, EL CITATORIO GIRADO POR LA MP NOEMI R. GIL. "*

Señalando en el apartado de “CUALQUIER OTRO DETALLE QUE FACILITE LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN”, lo siguiente:

*“DELITO*

*POSIBLE DESPOJO*

*CARPETA DE INVESTIGACIÓN*

*NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09*

*NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09.*

*LUGAR DE LOS HECHOS VALLE DE BRAVO, EDO. MEX.*

*AUTORIDAD INVESTIGADORAFISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTÍA MAYOR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN TOLUCA. (ACTUALMENTE) FISCALÍA REGIONAL CON SEDE EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN “E1” (INICIALMENTE)*

*MINISTERIO PÚBLICO QUE CONOCE DEL ASUNTO*

*LIC. PATRICIA URBINA MANCILLA en la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTÍA MAYOR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN TOLUCA.*

*LIC. NOEMI R. GIL FISCALÍA REGIONAL CON SEDE EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN “E1” (INICIALMENTE)”*

Modalidad de entrega: ***Entrega por el sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT***

Se hace constar de igual manera que, el entonces Solicitante adjuntó el documento electrónico *“****Archivo1693419583134.pdf****”*, del que se omite la descripción de su contenido en este apartado, atendiendo que será objeto de estudio en párrafos posteriores.

**SEGUNDO.** De las constancias que obran en el expediente electrónico, aperturado con motivo del ingreso de la solicitud de información, se advierte que el **Sujeto Obligado,** en fecha 14 (catorce) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), emitió respuesta en los términos siguientes:

*"En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*se proporciona respuesta "*

Se hace constar que, el **Sujeto Obligado** adjuntó el documento electrónico denominado “***OFICIO NÚMERO 03697-MAIP-FGJ-2023.pdf***”, el cual al ser del conocimiento de las partes, se omite su inserción en este apartado, en obvio de repeticiones innecesarias.

**TERCERO**. Inconforme con la respuesta proporcionada, en fecha 25 (veinticinco) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión, quedando registrado en el **SAIMEX** con el número de recurso **06490/INFOEM/IP/RR/2023,** en el que expresó como acto impugnado y razones o motivos de inconformidad los siguientes:

**Acto Impugnado:**

*“La respuesta por parte del sujeto obligado carece de motivación pues simplemente se basa en sostener que se hizo una "búsqueda minuciosa en sus archivos y documentos con los que cuenta y NO se encontró registro alguno, sin haber solicitado información a la Ministerio Público que giró el oficio que se anexó a la presente solicitud para su mejor búsqueda, su respuesta obedece a una respuesta dogmática y no a una búsqueda particular tomando en cuenta los datos que se proporcionaron a efecto de poder verificar la existencia de la información, vulnerando de esta manera el derecho fundamental que toda persona tiene como lo es el derecho de acceso a la información pública consagrada en la Constitución mexicana, así, en términos del artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se presume que la información existe pues se refiere a sus facultades, competencias y funciones, además que se anexó un documento oficial emitido por la agente del Ministerio Público mismo que no se ha desmentido que sea falso, y si es verídico corresponde a una carpeta de investigación necesariamente, por ello, en aras de realizar una verdadera y exhaustiva búsqueda de la información, se debe requerir a la agente del Ministerio Público a efecto de que manifieste si expidió el oficio en comento y que informe a qué carpeta de investigación corresponde a efecto de que se proporcione la información estadística que se requiere. Lo anterior en términos del numeral 139 de la citada Ley general, misma que exige además de que se deben señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, señalando al servidor público responsable de contar con la misma y no solo a la unidad administrativa en cuestión, situación que en el presente caso no acontece.” (sic)*

Asimismo, se hace constar que, la ahora parte **Recurrente**, adjuntó el documento electrónico *“****Archivo1695693774575.pdf****”*, del que se omite la descripción de su contenido en este apartado, atendiendo que será objeto de estudio en párrafos posteriores.

Recurso de revisión de que se trata, se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y con fundamento en el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y se turnó a través del **SAIMEX** al Comisionado Presidente **JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS,** a efecto de que decretara su admisión o desechamiento.

**CUARTO.** En fecha 28 (veintiocho) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), atento a lo dispuesto en el artículo 185 fracciones I, II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se acordó la admisión a trámite el referido recurso de revisión, así como la integración del expediente, que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles, realizarán manifestaciones y ofrecieran las pruebas y alegatos que a su derecho conviniera o exhibieran el informe justificado, según fuera el caso.

**QUINTO.** Una vez abierta la etapa de instrucción, se advierte que en un primer momento, el **Sujeto Obligado** rindió su informe justificado, a través de los documentos electrónicos *“****OFICIO NÚMERO 04091-MAIP-FGJ-2023.pdf*** y ***OFICIO NÚMERO 04092-MAIP-FGJ-2023.pdf****”*. Posteriormente, el **Sujeto Obligado** rindió en alcance a su informe justificado, el documento *“****SE. EXT. 37-2023.pdf****”*, en el cual amplio sus manifestaciones. Documentos que fueron puestos a la vista de la parte **Recurrente**, a efecto que presentara las manifestaciones que a sus intereses conviniera, sin que exista constancia de desahogo a la vista.

**SEXTO.** De las constancias que integran el expediente electrónico , se advierte que ha transcurrido el término de Ley, para la emisión de la resolución en el presente recurso de revisión, por lo que en fecha 10 (diez) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés), se notificó a las partes el acuerdo por el que se ordena ampliar el plazo para la emisión de la resolución, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

**a) Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.

**b) Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.

**c) Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

**d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**SÉPTIMO.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes de siete días hábiles para realizar sus manifestaciones en el acuerdo de admisión, y no habiendo prueba pendiente por desahogar, ni que documentos que integrar al expediente electrónico, se decretó el cierre de instrucción en fecha 07 (siete) de febrero de 2024 (dos mil veinticuatro), en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, ordenándose turnar los expedientes a la resolución que en derecho proceda.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión interpuestos por el ahora **Recurrente**, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero Y trigésimo cuarto fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 10, 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Del alcance del recurso de revisión.**

Anterior a todo debe destacarse que el recurso de revisión tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente y será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

Así mismo, esta Ponencia considera importante abordar el análisis de los requisitos de procedibilidad de los recursos de revisión, así el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece lo siguiente:

*“****Artículo 180****. El recurso de revisión contendrá:*

***I****. El Sujeto Obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II****. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

***III****. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

***IV****. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

***V****. El acto que se recurre;*

***VI****. Las razones o motivos de inconformidad;*

***VII****. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

***VIII****. Firma del Recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.*

*En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.”*

(Énfasis añadido)

En principio, de una interpretación del artículo transcrito se observan los requisitos que deberán contener los recursos de revisión; sobre el particular, de la revisión del expediente electrónico del SAIMEX se desprende que el solicitante y ahora Recurrente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, no proporcionó un nombre para que sea identificado, ya que en el apartado de “DATOS DEL SOLICITANTE”, no señalo como nombre o seudónimo con el cual desee identificarse, por lo que no tiene certeza sobre su identidad, lo que en estricto sentido, no se colmarían los requisitos establecidos en el citado artículo 180 de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, debe destacarse que el artículo 15 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que toda persona tendrá acceso a la información sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, de lo que se infiere que para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el nombre no es un requisito *sine qua non* que los particulares y, en su caso, los Recurrentes deban señalar, por el contrario la Ley de Transparencia prevé en su artículo 155, párrafo segundo la posibilidad de que las solicitudes de información sean anónimas, con nombre incompleto o seudónimo.

Correlativo a ello, cabe mencionar que los artículos 6, Apartado A, fracciones I, III, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo fracciones I y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, garantizan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que disponen que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública; preceptos cuyo texto y sentido literal es el siguiente:

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

*“****Artículo 6o****. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I****. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*…*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

*…*

***V****. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.”*

*…*

*La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

*“****Artículo 5****. …*

*…*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

*Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

***I****. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*…*

***III****. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”*

*(Énfasis añadido)*

Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca lo siguiente:

*“****Artículo 1o.*** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

En esa virtud, de una interpretación sistemática, armónica y progresiva del derecho humano de acceso a la información pública se reitera que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho derecho fundamental exime a quien lo ejerce, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que inclusive, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.

Robustece lo anterior, el Criterio 6/2014 del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se reproduce para una mayor referencia:

*“****Acceso a información gubernamental. No debe condicionarse a que el solicitante acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización.*** *De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1º, 2º, 4º y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la respuesta a una solicitud de acceso a información y entrega de la misma, no debe estar condicionada a que el particular acredite su personalidad, demuestre interés alguno o justifique su utilización, en virtud de que los sujetos obligados no deben requerir al solicitante mayores requisitos que los establecidos en la Ley. En este sentido, las dependencias y entidades, sólo deberán asegurarse de que, en su caso, se haya cubierto el pago de reproducción y envío de la información, mediante la exhibición del recibo correspondiente.*

***Resoluciones***

***• RDA 5275/13.*** *Interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comisionado Ponente Ángel Trinidad Zaldívar.*

***• RDA 2937/13.*** *Interpuesto en contra de LICONSA, S.A. de C.V. Comisionado. Ponente Gerardo Laveaga Rendón.*

***• RDA 3609/12.*** *Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.*

***• RDA 3361/12.*** *Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.*

***• RDA 0563/12.*** *Interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.”*

En ese orden de ideas, se estima que el requerimiento relativo al nombre como presupuesto de procedibilidad podría limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, debido a que el hecho de solicitar la identificación del Recurrente a través de dicho dato personal, en ciertos extremos se equipara a una exigencia acerca de su interés o justificación de su utilización, lo que materialmente haría nugatorio un derecho fundamental.

Aunado a ello, para el estudio de la materia sobre la que se resuelven los recursos de revisión resulta intrascendente el nombre de la persona que lo hubiere promovido, en virtud de que tanto la Constitución Federal, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, reconocen la prerrogativa de los individuos para no acreditar dicho interés o justificar su utilización, por lo que este Órgano Garante en la materia se encuentra impedido para realizar dicho análisis, en la inteligencia de que al limitar un derecho humano, como lo es el derecho de acceso a la información pública, por una cuestión procedimental.

En consecuencia, dado lo expuesto y fundado con anterioridad, se estima que el requisito relativo al nombre del Recurrente no constituye un presupuesto indispensable de procedibilidad de los recursos de revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1 párrafos segundo y tercero, 6 apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, párrafo vigésimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un derecho humano que no requiere legitimación en la causa, sino que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de recurso de revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas del expediente, de las que se desprende que el Recurrente, es la misma persona que realizó la solicitud de acceso a la información pública que ahora se impugna.

De igual manera, el propio artículo 180 de la Ley de Transparencia local, en su último párrafo establece que cuando el recurso se interponga de manera electrónica, no será indispensable que contenga determinados requisitos, entre ellos, el nombre del Recurrente, por lo que en el presente caso, al haber sido presentado el recurso de revisión vía SAIMEX, dicho requisito resulta innecesario.

**TERCERO. Del estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento.**

Es menester resaltar que en el procedimiento de acceso a la información pública y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad que deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo Garante.

Correlativo a ello, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las causas de improcedencia se analizarán de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente; además, con base en la jurisprudencia por reiteración con número de registro digital 222780, de rubro y texto:

*“****IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.*** *Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”.*

Siendo una facultad legal entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor; presupuestos procesales de inicio o trámite de un proceso que dotan de seguridad jurídica las resoluciones emitidas por este órgano colegiado, máxime que se trata de una figura procesal adoptada en la ley de la materia, la cual permite dilucidar alguna causal que impida el estudio y resolución de un asunto en su fondo, cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseerlo. Estudio de causales de improcedencia que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines[[1]](#footnote-1).

En primer término es necesario hacer alusión a la solicitud de información ya que de ella deriva por un lado al procedimiento de acceso a la información ante el **Sujeto Obligado**, y por otro lado la materia sobre la que versara el recurso de revisión ante este Órgano Garante; se resalta la innegable necesidad de interpretar el texto de la solicitud, porque no se podría entender el derecho de acceso a la información sin la existencia de solicitudes de información a la luz de su interpretación ya que ésta es la fuente de la materia objeto de la transparencia específica en cada recurso de revisión.

No podemos establecer una materia o un tema como objeto de derecho de acceso a la información, si de la solicitud no se entiende o no se precisan temas o materias objetivas; por ello es de notoria importancia el trabajo de interpretación que se le dé a una solicitud de información, ya que el **Sujeto Obligado** puede considerar una circunstancia en particular diversa a la que el particular objetivamente requiere.

Ya que el planteamiento del problema es de toral importancia, a efecto de determinar la intención o voluntad del **Recurrente** a la luz de la interpretación de la solicitud de información, y que puede generar de forma objetiva y material el **Sujeto Obligado** que se relacione con esa intención, respecto del presente asunto se realiza a continuación.

Precisado lo anterior, de conformidad con la redacción de la solicitud, se puede apreciar que la parte **Recurrente** manifiesta peticionar la información estadística de las carpetas de investigación **VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09** y **NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09**, siguiente:

1. Cuándo se iniciaron
2. Número de imputados
3. Numero de denunciantes y/o querellantes.
4. Si el o los son personas físicas o morales.
5. La dependencia dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que actualmente tiene a su cargo la integración de las carpetas de investigación.
6. El nombre del agente del ministerio público que tiene a su cargo la investigación de dichas carpetas.
7. Si en dichas carpetas de investigación se ha determinado el ejercicio de la acción penal.
8. Si en dichas carpetas de investigación se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.
9. Si en dichas carpetas de investigación se ha determinado el archivo temporal.
10. Se informe si dichas carpetas se encuentran en la etapa de investigación inicial.
11. Se informe si dichas carpetas se encuentran en la etapa de investigación complementaria.
12. Se informe el estatus actual de dichas carpetas de investigación.

Se observa que la parte Recurrente manifestó como datos o detalles que faciliten la búsqueda de la información, lo siguiente

*“CABE MENCIONAR QUE AL PARECER LA CARPETA VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 TUVO SU ORIGEN EN VALLE DE BRAVO Y DESPUES FUE ENVIADA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTÍA MAYOR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN TOLUCA, DONDE AL PARECER SE LE ASIGNÓ EL SIGUIENTE NUMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09. SE ANEXA PARA MEJOR CONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE SOLICITA, EL CITATORIO GIRADO POR LA MP NOEMI R. GIL.*

*DELITO*

*POSIBLE DESPOJO*

*CARPETA DE INVESTIGACIÓN*

*NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09*

*NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09.*

*LUGAR DE LOS HECHOS VALLE DE BRAVO, EDO. MEX.*

*AUTORIDAD INVESTIGADORAFISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTÍA MAYOR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN TOLUCA. (ACTUALMENTE) FISCALÍA REGIONAL CON SEDE EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN “E1” (INICIALMENTE)*

*MINISTERIO PÚBLICO QUE CONOCE DEL ASUNTO*

*LIC. PATRICIA URBINA MANCILLA en la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ROBO CON VIOLENCIA Y PATRIMONIALES DE CUANTÍA MAYOR, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN TOLUCA.*

*LIC. NOEMI R. GIL FISCALÍA REGIONAL CON SEDE EN VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN “E1” (INICIALMENTE)“*

El **Sujeto Obligado** emitió respuesta por medio del documento electrónico “***OFICIO NÚMERO 03697-MAIP-FGJ-2023.pdf***”, consistente en el oficio número 03697/IMAIP/FGJ/2023, remitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado al entonces Solicitante, informando sustancialmente lo siguiente:

*“Sobre el particular, de conformidad con el artículo 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, la solicitud de información referida, fue turnada al área competente de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que conforme a sus facultades y atribuciones pudiese contar con lo solicitado.*

*Al respecto, esta Fiscalía General, con fundamento en los artículos 1, 4 y 163, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; informa que la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor hizo de conocimiento que después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos y documentos con los que cuenta,* ***NO*** *se encontró registro alguno de la carpeta de investigación con el folio referido en su solicitud.”*

(Énfasis añadido)

Inconforme con la respuesta, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión, haciendo valer como acto impugnado objetivamente lo siguiente:

* *“La respuesta por parte del sujeto obligado carece de motivación pues simplemente se basa en sostener que se hizo una "búsqueda minuciosa en sus archivos y documentos con los que cuenta y NO se encontró registro alguno, sin haber solicitado información a la Ministerio Público que giró el oficio que se anexó a la presente solicitud para su mejor búsqueda,…”*
* *“…su respuesta obedece a una respuesta dogmática y no a una búsqueda particular tomando en cuenta los datos que se proporcionaron a efecto de poder verificar la existencia de la información,…”*
* *“…además que se anexó un documento oficial emitido por la agente del Ministerio Público mismo que no se ha desmentido que sea falso, y si es verídico corresponde a una carpeta de investigación necesariamente, por ello, en aras de realizar una verdadera y exhaustiva búsqueda de la información, se debe requerir a la agente del Ministerio Público a efecto de que manifieste si expidió el oficio en comento y que informe a qué carpeta de investigación corresponde a efecto de que se proporcione la información estadística que se requiere…”*
* *“…Lo anterior en términos del numeral 139 de la citada Ley general, misma que exige además de que se deben señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, señalando al servidor público responsable de contar con la misma y no solo a la unidad administrativa en cuestión, situación que en el presente caso no acontece.”*

Consideraciones que, se encuentran fundadas al encuadrar en la hipótesis normativa consagrada en las fracción I del artículo 179 de la Ley de Transparencia Local[[2]](#footnote-2), relativa a la negativa a la información.

Derivado dela interposición del recurso de revisión, en la etapa de manifestaciones el **Sujeto Obligado** presentó en un primer momento su informe justificado, por medio de los documentos *“****OFICIO NÚMERO 04091-MAIP-FGJ-2023.pdf*** y ***OFICIO NÚMERO 04092-MAIP-FGJ-2023.pdf****”*, de cuyo contenido se observa lo siguiente:

* ***OFICIO NÚMERO 04092-MAIP-FGJ-2023.pdf:*** Oficio número 04092/MAIP/FGJ/2023 de fecha 09 (nueve) de octubre de 2023 (dos mil veintitrés), a través del cual el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública del Sujeto Obligado, manifiesta remitir a este Órgano Garante su informe justificado del recurso de revisión 06490/INFOEM/IP/RR/2023.
* ***OFICIO NÚMERO 04091-MAIP-FGJ-2023.pdf:*** Oficio número 04091/MAIP/FGJ/2023 de fecha 09 (nueve) de octubre de 2023 (dos mil veintitrés), a través del cual el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información Pública del Sujeto Obligado, remitió a este Órgano Garante su informe justificado del recurso de revisión 06490/INFOEM/IP/RR/2023, del que se desprende sustancialmente lo siguiente:

*“****SEGUNDO.*** *- Una vez analizados los agravios, se considera que los mismos resultan infundados, toda vez que menciona que la ley fue violada, sin embargo, omite mencionar que parte de la respuesta le genera agravio y no demuestra el derecho que fue violentado, en virtud de que únicamente señala que la respuesta carece de motivación ya que simplemente sostiene que se realizó una revisión minuciosa de archivos y documentos con los que se cuenta y no se localizó alguno.*

***TERCERO.*** *- Por otro lado, derivado de una solicitud de información, lo procedente legalmente por parte de un sujeto obligado es términos de los artículos 11, 13, 21, 24 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso al a Información Pública, 10, 11 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es proporcionar la información pública que se requiere, que obre en sus archivos en el estado en que este se encuentre.*

*Fue así que, una vez recibida la solicitud 00883/FGJ/IP/2023, en la que solicitó información “estadística” de las carpetas de investigación con NUC:VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 y NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09 se realizó la búsqueda de dicha información en las fuentes que permitirán su ubicación y de esta manera estar en posibilidad de hacer del conocimiento del solicitante lo que requería, sin embargo, una vez concluida la búsqueda en particular en los archivos, libros y bases de datos con los que se cuenta y de la manera en la que fue indicada la información requerida, los resultados fueron negativos.*

***CUARTO****.- El acceso a la información pública comprende el derecho fundamental a solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se encuentre integrada en documentos que registren el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, lo que conlleva a documentar todo y presume su existencia de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción VII, 4, 18 y 19, de la Ley General, sin que exista la obligación de generar documentos ad hoc para atender solicitudes de acceso a la información.*

*…*

***QUINTO****. -No le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que se debió realizar una investigación, para en su caso, verificar la existencia de la información. En virtud que la única forma específica y razonable de llevar a cabo esa búsqueda, lo fue precisamente en la manera en que se realizó, y sin que se tenga como obligación practicar investigaciones para dar respuesta, pues se insiste que los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se requiere, que obre en sus archivos en el estado en el que ésta se encuentre y si en el asunto que nos trae al presente informe fue relativo a las carpetas con NUC:VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 y NIC VAL/VAL/01/MP1/184/01340/22/09 y dichas carpetas no se encuentran registradas en los archivos, libros y demás fuentes en las que se pueda realizar su búsqueda. Luego entonces no vulnera derecho alguno al recurrente y en consecuencia sus agravios resultan infundados e inoperantes.*

*…*

***SEXTO****.- No obstante lo anterior, se le sugiere al ahora Recurrente acuda a la Fiscalía Regional de Valle de Bravo en donde menciona se encuentra radicada la carpeta de su interés para que previa acreditación de su personalidad se le de acceso a la misma, de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.*

*Asimismo, en caso de haber algún dato erróneo, podrá aclarar el folio al que pretende tener acceso.*

*Lo anterior a efecto de evitar dar información que corresponda a carpeta diversa de la que es de interés del solicitante.*

*Conforme a lo referido, se acredita que este Órgano Público Autónomo atendió la solicitud de acceso a la información en términos de los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 4, 12, 24, 150, 162 y 163, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,…”*

Documentos descritos anteriormente, con los cuales ratificó su respuesta primigenia, respecto de haber agotado la búsqueda en la Fiscalía Especializada en delitos de robo con violencia y patrimoniales de cuantía mayor, la cual fue referida por la parte Recurrente.

Posteriormente, el **Sujeto Obligado** remitió en alcance a su informe justificado el documento *“****SE. EXT. 37-2023.pdf****”*, consistente en el acta de su Comité de Transparencia de la Sesión Extraordinaria número 37/2023, en cuya orden del día, se encuentra señalado el numeral 6, relativo a *“6.- Análisis para la aprobación, modificación o revocación de la clasificación para dar atención al recurso de revisión 006490/INFOEM/IP/RR/2023”*, en el que medularmente se expresan las manifestaciones siguientes:

*“****TERCERO****.- La Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en sus artículos 28 y 29 establece las unidades administrativas que la componen, y las Fiscalías Especializadas con las que cuenta, así como lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México aplicable en términos del numeral PRIMERO del acuerdo 01/2016 del Fiscal General de Justicia del Estado de México.*

***CUARTO****.- En relación a la carpeta de investigación señalada en la solicitud de acceso a la información 00883/FGJ/1P/2023, tras haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en las unidades administrativas que con motivo de sus funciones pudieran contar con la información solicitada, se constató de manera indubitable que la carpeta de investigación solicitada, con las nomenclaturas proporcionadas no existe, o es erróneo el dato proporcionado, ya que la Fiscalía Regional de Valle de Bravo informó que no se localizó indagatoria con el NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 sin embargo, al continuar con la búsqueda del NIC, se encontró una coincidencia con el proporcionado en la solicitud, no obstante, al no haber coincidencia en el Número Único de Causa, (NUC), puede concluir que* ***no se trata del mismo documento****, en ese sentido, con independencia de la probable incidencia de un error en el folio proporcionado por el solicitante, se acreditan elementos para declarar la inexistencia de la carpeta requerida por el solicitante mediante el folio 00883/FGJ/IP/2023, toda vez que, como se ha asentado, no se cuenta con carpeta de investigación con los dato proporcionados en la solicitud que nos ocupa.*

*…*

*Como consecuencia de lo vertido con anterioridad, esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, declara formalmente la inexistencia de la carpeta de investigación NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09.*

*Hechos los comentarios al respecto, el Comité de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emite el siguiente:*

|  |
| --- |
| ***ACUERDO******SE/37/2023/05*** |
| *Se aprueba por UNANIMIDAD, la declaración de inexistencia de la carpeta de investigación NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09 NIC: VAL/VAL/01/MP1/184/01340/22/09.**Por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia notifíquese el presente acuerdo de inexistencia, a través del sistema respectivo.* |

Una vez descrito el contenido de los documentos integrados en el expediente electrónico, podemos concluir que el presente asunto se centra en determinar si la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado**, se encuentra emitida conforme a derecho, por lo que, se procede al estudio y resolución en los términos siguientes.

Debemos de partir que la parte **Recurrente** peticiona información de dos carpetas de investigación con números de identificación **NUC: VAL/VAL/VBR/111/282229/20/09** y **NIC: VAL/VAL/01/MPI/184/01340/22/09**, en ese orden de ideas, resulta necesario señalar que es NUC y NIC, lo cual se encuentra señalado en la fracción IV del artículo SEGUNDO del Acuerdo Número 16/2016, del Procurador General de Justicia Del Estado De México, por el que se Instruye el uso obligatorio del Sistema Informático de Gestión Institucional del Procedimiento Penal en el Estado de México “SIGIPPEM”, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el cual dispone:

*“****Instrucciones al personal operativo***

***ARTÍCULO SEGUNDO.-*** *Los orientadores jurídicos, agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación, Peritos y facilitadores de justicia restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, deberán utilizar y operar el SIGIPPEM en sus actividades con motivo del procedimiento penal acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales.*

*Los servidores públicos antes citados, en la aplicación del SIGIPPEM deberán cumplir con lo siguiente:*

*…*

***IV.*** *Para iniciar un caso en el SIGIPPEM, los orientadores jurídicos o los agentes del Ministerio Público deberán generar su número interno de control (****NIC****) que es una clave alfanumérica de 30 dígitos en la que pueden registrar lo actuado como noticia criminal; en caso de que sea necesario realizar una carpeta de investigación se generará el número único de causa (****NUC****), de 28 dígitos, que será la identificación alfanumérica del caso a lo largo de todo el procedimiento penal y por ello será de uso de todos los operadores de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban. Dichos números deberán insertarse en todas las actuaciones institucionales. La composición del NIC y del NUC se establece en el anexo uno del presente Acuerdo.*



Conforme a lo anterior, se tiene por acreditado lo que debe entenderse por número interno de control (NIC) y por el número único de causa (NUC), asimismo, los diferentes elementos que los integran.

Datos que toman relevancia, derivado que el propio particular proporcionó dichos datos de identificación de las carpetas de investigación de las que peticiona la información. Obteniendo como respuesta del **Sujeto Obligado** el haber realizado la búsqueda de la información en la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, al haber señalado el particular que dicha carpeta había sido enviada a dicha área, obteniendo como resultado de la búsqueda, el no contar con registro alguno.

Atentos a lo anterior, es necesario recordarle al **Sujeto Obligado** que los particulares pueden no ser expertos en cuanto hace a la forma de administración, procedimientos, tecnicismos y ordenamientos que rigen el actuar de las Dependencias Gubernamentales, por lo que, en áreas de garantizar el derecho de acceso a la información, debía haber ahotado la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en todas y cada una de las áreas que en ejercicio de sus atribuciones pudieran poseer la información.

Ahora bien, lo procedente es hacer estudio del marco normativo, a efecto de determinar las distintas áreas que conforman la estructura orgánica del Sujeto Obligado, por lo que, se traen a contexto los artículos 1, 28 y 29 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y 9 y 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México[[3]](#footnote-3), los cuales señalan:

***“Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México***

***Artículo 1.*** *La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las atribuciones, organización y funciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, la Policía de Investigación y a los Servicios Periciales le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.*

***Artículo 28.*** *Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía, esta se auxiliará de las unidades administrativas siguientes:*

*I. Vicefiscalía General.*

*II. Fiscalías Centrales.*

*III. Oficialía Mayor, Órgano Interno de Control, Visitaduría General, comisiones, coordinaciones generales, institutos y centros.*

*IV. Fiscalías regionales y especializadas.*

*V. Direcciones generales y direcciones generales adjuntas.*

*VI. Direcciones de área, subdirecciones y jefaturas de departamento.*

*VII. Las demás unidades administrativas necesarias para el ejercicio de sus funciones conforme a la disponibilidad presupuestal.*

*Los rangos y jerarquías de las Fiscalías antes mencionadas serán determinados en el Reglamento, así como el número, materia y circunscripción territorial de actuación de las unidades administrativas.*

*La o el Fiscal General podrá nombrar y remover a los titulares de las unidades administrativas de la Fiscalía, salvo los casos establecidos en la Constitución del Estado.*

***Artículo 29.*** *La Fiscalía contará con las Fiscalías Especializadas en las materias siguientes:*

*I. Anticorrupción.*

*II. Delitos vinculados a la violencia de género.*

*III. Delitos cometidos por adolescentes.*

*IV. Delitos electorales.*

*V. Para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.*

*VI. Las demás que se establezcan en el Reglamento.*

*El personal operativo que integre las unidades administrativas antes referidas contará con la capacitación y en su caso especialización continua en los asuntos de su competencia, observando las mejores prácticas para el desempeño de sus funciones y la atención de las víctimas u ofendidos.*

***Reglamento de la Ley Orgánica de la***

***Procuraduría General de Justicia del Estado de México***

*“****Componentes del Sistema de Especialización***

***Artículo 9.*** *El sistema de especialización estará a cargo de las Subprocuradurías para la atención Especializada y para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género e integradas por las Fiscalías Especializadas que tendrán a su cargo la atención de los hechos que se consideren constitutivos de los delitos siguientes:*

*I. Secuestro;*

*II. Homicidio;*

*III. Robo con violencia y patrimoniales de cuantía mayor;*

*IV. Dolosos cometidos por integrantes de corporaciones policiales;*

*V. Delitos vinculados a la violencia de género;*

*VI. Trata de personas;*

*VII. Cometidos por servidores públicos;*

*VIII. Contra el transporte, y*

*IX. Los demás que determine el Procurador mediante acuerdo.*

*El Procurador determinará los ámbitos de competencia de las Fiscalías Especializadas, conforme a los géneros delictivos de mayor impacto social, las circunstancias criminógenas, la frecuencia de conductas antisociales y su relevancia, así como los lineamientos para la coordinación con las Fiscalías Regionales y demás unidades administrativas de la Procuraduría.*

*Las Fiscalías Especializadas actúan en todo el territorio del Estado, en coordinación con los órganos desconcentrados y unidades administrativas de la Procuraduría.*

*Asimismo, integran el Sistema de Especialización, en términos de lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento, los sistemas informáticos, documentos y expedientes administrativos, así como las investigaciones que el Ministerio Público genere con motivo del ejercicio de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos.*

*El Procurador, con base en análisis y estudios, incluso en casos extraordinarios en los que las peculiaridades del delito o delitos lo ameriten, podrá, mediante acuerdo, constituir Fiscalías Especializadas y Especiales para la atención de géneros delictivos o delitos específicos, según sea el caso. Dichas Fiscalías podrán ser permanentes o transitorias, según las necesidades del servicio, en los términos del acuerdo correspondiente y las disponibilidades presupuestales.*

***Atribuciones de la Subprocuraduría de Atención Especializada***

***Artículo 19.*** *Al frente de la Subprocuraduría de Atención Especializada habrá un Subprocurador, quien ejercerá las atribuciones siguientes:*

*I. Ejercer las atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos de su competencia se le confieren al Ministerio Público;*

*II. Coordinarse con la Subprocuraduría General y demás unidades administrativas de la Procuraduría para la investigación y práctica de diligencias;*

*III. Conocer de los asuntos que tengan a su cargo las agencias del Ministerio Público, relacionados con los delitos materia de su competencia y ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos que se hayan iniciado en las Fiscalías Regionales, de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determine el Procurador;*

*IV. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, las medidas cautelares, el arraigo, el aseguramiento o embargo precautorio de bienes, para los fines de la investigación, así como para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;*

*V. Remitir a las mesas de trámite de las Fiscalías Regionales las investigaciones relacionadas con delitos materia de su competencia para su prosecución, de conformidad con las normas y políticas institucionales o cuando así lo determine el Procurador;*

*VI. Ejercer las facultades delegadas por el Procurador en materia de solicitudes a las autoridades judiciales competentes para la autorización de la intervención de comunicaciones privadas, requerimientos de información y datos que conserven los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, así como en materia fiscal y sobre operaciones que las instituciones financieras celebren con sus clientes y, en los casos conducentes, ordenar el aseguramiento de los recursos, bienes y derechos que correspondan, en los términos de las disposiciones aplicables;*

*VII. Coordinar su actuación con las autoridades federales, del Distrito Federal o de otras entidades federativas y municipios, en la investigación de los delitos materia de su competencia;*

*VIII. Promover la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos y de justicia restaurativa en los asuntos materia de su competencia;*

*IX. Participar en la formulación y ejecución de programas preventivos y promover la difusión de medidas para la prevención de delitos materia de su competencia;*

*X. Vigilar que los servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Atención Especializada sean respetuosos de la dignidad y derechos humanos de las personas relacionadas en los asuntos de su competencia;*

*XI. Proponer al Procurador la celebración de convenios con organismos afines, tanto nacionales como internacionales para la cooperación y el intercambio de información, así como en las tareas de investigación, acusación y persecución del o los imputados de delitos de su competencia;*

*XII. Recibir quejas sobre demora, exceso o deficiencias en que hayan incurrido servidores públicos a su cargo con motivo del ejercicio de sus funciones, dictar las determinaciones tendientes a corregirlas y, en su caso, dar vista a los órganos de control interno por la probable responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar;*

*XIII. Establecer sistemas de registro y control de los asuntos a su cargo, llevar el seguimiento estadístico y remitir a las unidades administrativas competentes la información necesaria para la evaluación de los programas y proyectos que se le hayan encomendado;*

*XIV. Asignar los agentes del Ministerio Público y personal adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada, a las Fiscalías Especializadas y demás unidades administrativas que correspondan, autorizar la distribución del personal que realicen los titulares de las Fiscalías y ordenar la rotación de los servidores públicos, conforme a las necesidades del servicio, y*

*XV. Las demás que le confieren otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Procurador.*

*La Subprocuraduría de Atención Especializada se auxiliará de las Fiscalías Especializadas y de Asuntos Especiales que se establezcan en la estructura de organización de la Procuraduría o en los acuerdos que emita el Procurador, así como de las demás unidades administrativas que determinen las normas aplicables, salvo que el titular de la Institución determine una adscripción diversa.*

(Énfasis añadido)

Preceptos legales con los cuales se acredita que la existencia de distintas unidades administrativas que integran la estructura orgánica del **Sujeto Obligado**, particularmente las Fiscalías territoriales y las Fiscalías especializadas por Delito.

Lo anterior, toma relevancia atendiendo que de las manifestaciones vertidas en respuesta e informe justificado, el **Sujeto Obligado** únicamente agotó la búsqueda de la información en la Fiscalía Especializada en Robo con violencia y patrimoniales de cuantía mayor, circunstancia que vulneró el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente**, al no haber atendido lo establecido en los artículos 3 fracciones XXXIX y XLIV, 4, 12, 23 fracción IV, 51, 58, 59, 162, 163 de la Ley de Transparencia Local, que para pronta referencia se citan a continuación:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XXXIX. Servidor público habilitado:*** *Persona encargada dentro de las diversas unidades administrativas o áreas del sujeto obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información;*

***…***

***XLIV. Unidad de transparencia:*** *La establecida por los sujetos obligados para ingresar, actualizar y mantener vigente las obligaciones de información pública en sus respectivos portales de transparencia; tramitar las solicitudes de acceso a la información pública; y*

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la Información Pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar Información Pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información*** *generada,* ***obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia,* ***privilegiando el principio de máxima publicidad*** *de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

***Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

***Artículo 23.*** *Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:*

***…***

***IV.*** *Los ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la administración municipal;*

*…*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada. Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley*

***Artículo 58.*** *Los servidores públicos habilitados serán designados por el titular del sujeto obligado a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia.*

***Artículo 59.*** *Los servidores públicos habilitados tendrán las funciones siguientes:*

*I. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia;*

*II. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia;*

*III. Apoyar a la Unidad de Transparencia en lo que esta le solicite para el cumplimiento de sus funciones;*

*IV. Proporcionar a la Unidad de Transparencia, las modificaciones a la información pública de oficio que obre en su poder;*

*V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta;*

*VI. Verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los supuestos de información clasificada; y*

*VII. Dar cuenta a la Unidad de Transparencia del vencimiento de los plazos de reserva.*

***Artículo 162. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes*** *que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.*

***Artículo 163.*** *La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la solicitud al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.*

*Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.”*

(Énfasis añadido)

Ordenamientos que establecen las obligaciones en materia de transparencia de los **Sujetos Obligados**, respecto al trámite y atención de las solicitudes de información. Obligaciones relativas a admitir y turnar a los servidores públicos habilitados que, en ejercicio de sus atribuciones, generen, administren, procesen o posean la información.

Ahora bien, el **Sujeto Obligado** subsanó su omisión al manifestar mediante el acta de su Comité de Transparencia de la Sesión Extraordinaria número 37/2023, haber agotado una búsqueda exhaustiva y razonable en todas y cada una de las unidades administrativas que en ejercicio de sus atribuciones pudieran tener en sus archivos la información, obteniendo como resultado de la búsqueda que **no existe registro alguno** de carpeta con el Número Único de Causa (**NUC)** proporcionado por la parte Recurrente, de igual manera señaló que se hizo búsqueda conforme al número interno de control (**NIC**), encontrando una coincidencia con dicho dato pero el NUC de ésta **no es el proporcionado**, concluyendo que no corresponde con la información peticionada. En ese orden de ideas, el **Sujeto Obligado** consideró necesaria la emisión del acuerdo SE/37/2023/05, relativo a la inexistencia de la información peticionada.

Acuerdo de inexistencia que debe ser emitido de conformidad con los artículos 18, 19, 49 fracciones II y XIII, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establecen lo siguiente:

*“****Artículo 18.*** *Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.*

***Artículo 19.*** *Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.*

*…*

*Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.*

***Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

*…*

***II.*** *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;*

*…*

***XIII.*** *Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las unidades administrativas y resolver en consecuencia;*

***…***

***Artículo 169.*** *Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:*

***I.*** *Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;*

***II.*** *Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;*

***III.*** *Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y*

***IV.*** *Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.*

*La Unidad de Transparencia deberá notificarlo al solicitante por escrito, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.*

*Este plazo podrá ampliarse hasta por otros siete días hábiles, siempre que existan razones para ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.*

***Artículo 170.*** *La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la existencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma****.”*** *(sic)*

*(Énfasis añadido)*

Así tenemos que, el Acuerdo de inexistencia se dicta en aquellos supuestos en los que la información solicitada **fue generada**, **poseída o administrada** por **el Sujeto Obligado** en el marco de las funciones de servidor público; sin embargo, si éste ya no la posee, deberá expresar a través de un acuerdo debidamente fundado y motivado las razones de ello. En otras palabras, hablar de información inexistente implica la alta responsabilidad de explicar a la ciudadanía por qué un ente público que tiene la facultad y el deber de generar, poseer o administrar su información pública no la tiene.

Artículos que en el caso particular no resultan de aplicabilidad, atendiendo que si bien, el **Sujeto Obligado** emitió acuerdo de inexistencia, de conformidad con las respuestas, se tiene por acreditado que la información peticionada no coincide con los datos que permitan su búsqueda y localización, **no así que la documentación haya sido elaborada y posteriormente extraviada o destruida,** argumentos que son compartidos en el Criterio de Interpretación SO/007/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, el cual establece:

*“****Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información.*** *La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.*

***Precedentes:***

* *Acceso a la información pública. RRA 2959/16. Sesión del 23 de noviembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Gobernación. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.*
* *Acceso a la información pública. RRA 3186/16. Sesión del 13 de diciembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas.*
* *Acceso a la información pública. RRA 4216/16. Sesión del 05 de enero de 2017. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Cámara de Diputados. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.*

Hechas las precisiones anteriores, podemos concluir que el Sujeto Obligado subsanó su omisión de no haber tutelado el derecho de acceso a la información de la parte **Recurrente**, al inobservar los citados artículos 3 fracciones XXXIX y XLIV, 4, 12, 23 fracción IV, 51, 58, 59, 162, 163 de la Ley de Transparencia Local, relativos a realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en todas y cada una de las unidades administrativas que en ejercicio de sus atribuciones pudieran tener el soporte documental peticionado.

En ese orden de ideas, podemos concluir que resulta de observancia lo consagrado en la fracción III del artículo 192, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipiosvigente, que a la letra señala:

***“Artículo 192.*** *El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:*

*(…)*

***III.*** *El sujeto obligado responsable del acto lo* ***modifique*** *o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia;*

*(…)*

(Énfasis añadido)

El citado precepto legal consagra la procedencia para sobreseer el recurso de revisión cuando una vez admitido, el **Sujeto Obligado** modifique o revoque su acto, de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, circunstancias que se acreditan por lo siguiente:

Como quedó precisado en párrafos previos, en un primer momento el **Sujeto Obligado** no emitió debida respuesta a la solicitud de información, posteriormente, **a través de su alcance al informe justificado, amplió (modifico) su respuesta** en el sentido de subsanar su omisión de agotar una debida búsqueda exhaustiva y razonable de la información.

En consecuencia, resulta procedente determinar el **sobreseimiento** del presente recurso de revisión, el cual provoca que un procedimiento se resuelva en definitiva sin que se entre al estudio de los agravios o motivos de inconformidad. Este mismo criterio es compartido por el más alto tribunal del país en múltiples jurisprudencias, por lo que a continuación se agrega una de ellas que sirve como orientador en esta resolución:

***SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.***

*El sobreseimiento en el juicio de amparo directo provoca la terminación de la controversia planteada por el quejoso en la demanda de amparo, sin hacer un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia reclamada. Por consiguiente, si* ***al sobreseerse en el juicio de amparo no se pueden estudiar los planteamientos que se hacen valer en contra del fallo reclamado****, tampoco se deben analizar las violaciones procesales propuestas en los conceptos de violación, dado que, la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio de amparo sin resolver la controversia en sus méritos.*

*SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.*

*Amparo directo 699/2008. Mariana Leticia González Steele. 13 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Arnulfo Mateos García.*

(Énfasis añadido)

De este modo, se puede deducir que, en las resoluciones dictadas por el Pleno de este Instituto, en las que se decreta el sobreseimiento de un recurso de revisión por la actualización de alguno de los supuestos jurídicos contemplados en el artículo **192** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**, nos encontramos ante un sobreseimiento definitivo toda vez que pone fin al procedimiento sin entrar al estudio de fondo del mismo.

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, si bien resultaban fundados los motivos de inconformidad que arguye **el Recurrente** al momento de interponer su medio de impugnación, también lo es que los mismos quedaron sin materia de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho hechas valer en líneas precedentes que fueron materia de estudio, por ello **con fundamento en la segunda hipótesis de la fracción I del artículo 186,** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **SOBRESEE** el recurso de revisión **06490/INFOEM/IP/RR/2023**, que ha sido materia del presente fallo.

Por lo antes expuesto y fundado es de resolverse y,

**SE RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **SOBRESEE** el recurso de revisión número **06490/INFOEM/IP/RR/2023**, porque el **Sujeto Obligado** al modificar su respuesta, el recurso de revisión quedó sin materia, en términos del artículo 192 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en términos del Considerando **TERCERO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** **NOTIFÍQUESE** vía SAIMEX la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado**.

**TERCERO.** **NOTIFÍQUESE** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), al **Recurrente** la presente resolución y hágase del conocimiento que en caso de que considere que la presente resolución le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CCR/\*

1. ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

*Del examen de compatibilidad de los artículos* *73 y 74 de la Ley de Amparo* *con el artículo* *25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos****no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I.*** *La negativa a la información solicitada;*

*…* [↑](#footnote-ref-2)
3. Documento que, si bien es cierto es de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, le es de aplicabilidad al no haber sido emitido el de la actual Fiscalía General de Justicia. [↑](#footnote-ref-3)